El siguiente es el documento presentado por el Magistrado Ponente que sirvió de base para proferir la providencia dentro del presente proceso. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en la Secretaría de esta Sala.



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA

SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL

Magistrada Ponente

**OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA**

**Providencia**: Sentencia – 1ª instancia – 08 de marzo de 2017

**Proceso:** Acción de Tutela – Concede el amparo

**Radicación Nro.** : 66001-22-05-000-2017-00033-00

**Accionante:** José Roberto Zuluaga Martínez

**Accionado:** Ministerio de Educación y Subdirección de Aseguramiento de la Calidad del

Ministerio de Educación

**Tema a Tratar: DERECHO DE PETICIÓN**

El artículo 23 de la Constitución Nacional consagra este derecho, el que fue desarrollado por la actual Ley estatutaria 1755 de 2015 promulgada el 30-06-2015.

Sobre este derecho la Jurisprudencia Constitucional tiene dicho de manera reiterada (2012)[[1]](#footnote-1), que el derecho de petición exige concretarse en una pronta y oportuna respuesta por parte de la autoridad ante la cual ha sido elevada la solicitud, sin importar que la misma sea favorable a los intereses del peticionario y escrita, pero en todo caso debe “*cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.”*

Por ende, se vulnera este derecho cuando: ***(i)*** la entidad deja de emitir una respuesta en un lapso que, en los términos de la Constitución, se ajuste a “pronta resolución”, ***(ii)*** la respuesta se limita a evadir la petición, o carece de claridad, precisión y congruencia, o ***(iii)*** se deja de comunicar al interesado[[2]](#footnote-2)*[[3]](#footnote-3)*.

Pereira, Risaralda, ocho (08) de marzo de dos mil diecisiete (2017)

Acta número \_\_\_\_ de 08-03-2017

Decide la Sala en primera instancia, la acción de tutela instaurada por el señor José Roberto Zuluaga Martínez, identificado con cédula de ciudadanía No.10.126.403, quien actúa en nombre propio en contra del Ministerio de Educación y la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad del Ministerio de Educación.

**ANTECEDENTES**

**1. Derechos fundamentales invocados, pretensión y hechos relevantes en los que se funda**

Quien promueve el amparo, pretende la protección de su derecho fundamental de petición, para lo cual solicita se ordene a las accionadas, den respuesta de fondo a la petición formulada.

Narró que el 27-01-2017 presentó petición, la que fue recibida el 30-01-2017, donde solicitó copia del examen de legalidad realizado a los documentos que sustentaron la convalidación, que finalizó mediante Resolución No.2633 de 05-04-2011.

**2. Pronunciamiento del Ministerio de Educación y la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad del Ministerio de Educación**

A pesar de estar debidamente notificadas descorrieron el término en silencio.

**CONSIDERACIONES**

**1. Competencia**

Esta Sala es competente para conocer de esta acción, por cuanto la autoridad accionada es el Ministerio de Educación, el que tiene la calidad de autoridad pública del orden nacional.

**2. Problema jurídico**

En atención a lo expuesto por la accionante, la Sala se formula el siguiente interrogante:

¿Los accionados han vulnerado el derecho de petición del señor José Roberto Zuluaga Martínez al omitir dar respuesta a la petición de fecha allegada el 27-01-2017?

Previo a abordar el interrogante planteado le compete a la Sala verificar el cumplimiento de los requisitos de procedencia de la acción de tutela.

**3. Requisitos de procedencia de la tutela**

Se tiene como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991: (i) la presunta vulneración de un derecho fundamental por acción u omisión de una autoridad pública y en algunos casos por particulares, (ii) legitimación por activa y por pasiva de los accionados, (iii) la inmediatez y (iv) subsidiariedad[[4]](#footnote-4).

**3.1. Legitimación**

Está legitimada por activa el accionante señor José Roberto Zuluaga Martínez quien actúa en nombre propio, al ser el titular del derecho de petición, quien alega que presentó petición ante las accionadas el día 27-01-2017, sin obtener respuesta.

Así mismo, lo está por pasiva solo la Subdirectora de Aseguramiento de la Calidad, Jeanette Rocío Gilede González, pues a ella se le endilga la presunta conducta violatoria del derecho de petición, cuya protección se reclama, por ser la autoridad ante quien se dirigió y presentó la petición.

Por el contrario, no lo está la Ministra del Ministerio de Educación, Yaneth Giha Tovar[[5]](#footnote-5), a pesar de presentarse la tutela contra ella, por cuanto se probó dentro del trámite tutelar que finalmente quien recibió la petición fue la Subdirección Aseguramiento de la Calidad (fl. 8), la que hace parte del organigrama del Ministerio de Educación, dentro del Viceministerio de Educación Superior[[6]](#footnote-6), razón por la cual se la desvinculará.

**3.2 Derecho fundamental**

No cabe duda que es fundamental el de petición.

**3.3. Inmediatez y subsidiariedad**

La Corte Constitucional ha dicho que cuando se trata de proteger el derecho de petición, el ordenamiento jurídico colombiano no tiene previsto un medio de defensa judicial idóneo ni eficaz diferente de la acción de tutela, por ello, quien resulte afectado por la vulneración a este derecho fundamental no dispone de ningún mecanismo ordinario de naturaleza judicial que le permita efectivizar el mismo[[7]](#footnote-7). En el presente asunto la parte accionante busca la protección a su derecho fundamental de petición de ahí que pueda acudir directamente a la acción de amparo constitucional.

En relación con la inmediatez, también se encuentra satisfecha por cuanto la fecha de la petición es del 27-01-2017, transcurriendo desde esa fecha hasta la presentación de la acción de amparo (28-02-2017), un (1) mes que se considera razonable para incoar esta acción.

**4. Fundamentos jurídicos de la decisión**

**4.1. Del derecho fundamental de petición**

El artículo 23 de la Constitución Nacional consagra este derecho, el que fue desarrollado por la actual Ley estatutaria 1755 de 2015 promulgada el 30-06-2015.

Sobre este derecho la Jurisprudencia Constitucional tiene dicho de manera reiterada (2012)[[8]](#footnote-8), que el derecho de petición exige concretarse en una pronta y oportuna respuesta por parte de la autoridad ante la cual ha sido elevada la solicitud, sin importar que la misma sea favorable a los intereses del peticionario y escrita, pero en todo caso debe “*cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.”*

Por ende, se vulnera este derecho cuando: ***(i)*** la entidad deja de emitir una respuesta en un lapso que, en los términos de la Constitución, se ajuste a “pronta resolución”, ***(ii)*** la respuesta se limita a evadir la petición, o carece de claridad, precisión y congruencia, o ***(iii)*** se deja de comunicar al interesado[[9]](#footnote-9)*[[10]](#footnote-10)*.

**5. Caso concreto**

Descendiendo al caso bajo examen, se encuentra probado que (i) la petición de copia del examen de legalidad realizado a los documentos que sustentaron la convalidación del actor que finalizó mediante Resolución No.2633 de 05-04-2011, fue enviada el 27-01-2017 y recibida por la accionada Subdirección de Aseguramiento de la Calidad del Ministerio de Educación el 30-01-2017, según consta en los documentos visibles a folios 6 a 9; (ii) ha pasado un (1) mes y la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad del Ministerio de Educación no ha emitido una respuesta; (iii) negación indefinida que no se desvirtuó pues dentro de éste trámite se la requirió mediante auto de 28-02-2017 para que expusiera si ha dado respuesta a la petición presentada por el accionante el 27-01-2017 y de ser así allegara copia de la misma junto con la constancia de notificación, sin que contestara (fl.12, 15 a 16).

Por lo anterior, resulta claro para esta Sala que se ha vulnerado el derecho de petición del señor José Roberto Zuluaga Martínez, por cuanto no ha recibido una respuesta de fondo, clara, precisa y congruente con lo solicitado, y tampoco le ha sido notificada, razón por la cual resulta imperioso amparar este derecho.

**CONCLUSIÓN**

Por consiguiente, ante la palmaria vulneración al derecho fundamental de petición por parte de la autoridad accionada Subdirección de Aseguramiento de la Calidad del Ministerio de Educación, habrá que tutelar el derecho invocado como vulnerado y, en consecuencia, ordenar a la Subdirectora de Aseguramiento de la Calidad, Jeanette Rocío Gilede González o quien haga sus veces, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este proveído, si no lo hubieren hecho, procedan a responder la petición enviada el 27-01-2017 y radicada el 30-01-2017.

**DECISIÓN**

En mérito de lo expuesto, el **Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Risaralda - Sala Cuarta de Decisión**, administrando justicia en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución,

**R E S U E L V E**

**PRIMERO: TUTELAR** el derecho de petición del cual es titular el señor José Roberto Zuluaga Martínez, identificado con cédula de ciudadanía No.10.126.403, quien actúa en nombre propio en contra de la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad del Ministerio de Educación.

**SEGUNDO: ORDENAR** a la Subdirectora de Aseguramiento de la Calidad del ministerio de Educación, Jeanette Rocío Gilede González o quien haga sus veces, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este proveído, si no lo hubieren hecho, proceda a responder la petición enviada el 27-01-2017 y radicada el 30-01-2017.

**TERCERO: DESVINCULAR** a la Ministra Yaneth Giha Tovar del Ministerio de Educación, por las razones expuestas en la parte motiva.

**CUARTO: NOTIFICAR** a las partes el contenido de este fallo en los términos del artículo 16 del Decreto 2591 de 1991, informándoseles que el mismo puede ser impugnado dentro de los tres días siguientes a la notificación.

**QUINTO: DISPONER** que en caso de que la presente decisión no fuese impugnada, se remita el expediente para ante la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

**OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA**

**Magistrada Ponente**

**JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN Magistrado Magistrada**

1. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-146-2012. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. [↑](#footnote-ref-1)
2. T- 249 de 2001 pues no puede tenerse como real contestación la que sólo es conocida por la persona o entidad de quien se solicita la información”. T-912 de 2003 en la que se dice:” según lo tiene establecido la Corte, una respuesta dirigida al juez de tutela no constituye una respuesta clara y oportuna notificada al interesado”. [↑](#footnote-ref-2)
3. #####  CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-667-2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

 [↑](#footnote-ref-3)
4. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-275 de 12-04-2012, M.P. Juan Carlos Henao Pérez [↑](#footnote-ref-4)
5. <http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-355837.html> [↑](#footnote-ref-5)
6. <http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-89256.html> [↑](#footnote-ref-6)
7. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-149 -2013. M.P Luis Guillermo Guerrero Pérez. [↑](#footnote-ref-7)
8. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-146-2012. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. [↑](#footnote-ref-8)
9. T- 249 de 2001 pues no puede tenerse como real contestación la que sólo es conocida por la persona o entidad de quien se solicita la información”. T-912 de 2003 en la que se dice:” según lo tiene establecido la Corte, una respuesta dirigida al juez de tutela no constituye una respuesta clara y oportuna notificada al interesado”. [↑](#footnote-ref-9)
10. #####  CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-667-2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

 [↑](#footnote-ref-10)